

ENERO

REVISIÓN DEL AÑO

EEUU: Unos dos millones de personas marcharon en protestas en ciudades de todo el país y alrededor del mundo el 20 de enero, fecha de la asunción presidencial de Trump.

GAMBIA: El presidente Jammeh intentó aferrarse al poder pese a haber perdido las elecciones, pero la presión popular e internacional lo obligó a dar un paso al costado.

PAKISTÁN: Cinco blogueros y activistas de las redes sociales que denunciaban los abusos de derechos humanos de los Talibán y los militares, fueron detenidos y torturados.

REPÚBLICA DOMINICANA: Decidido a desafiar la corrupción sistemática y en gran escala, el Movimiento Marcha Verde convocó a una marcha el 22 de enero, de la que participaron unas 200.000 personas; fue la manifestación pacífica más multitudinaria en la historia del país.



El año 2017 comenzó con algunos éxitos notables de la sociedad civil. Cuando el presidente de **Gambia**, Yahya Jammeh, intentó mantenerse en el poder después de perder una elección, la acción unificada de la sociedad civil contribuyó crucialmente a generar la presión que lo obligó a aceptar el veredicto de las urnas (**véase a continuación**). Ocho años después de presentado el primer borrador y tras una larga campaña de incidencia de la sociedad civil, el parlamento del Líbano finalmente aprobó un proyecto de ley de **acceso a la información**. En India, Lawyers' Collective (Colectivo de Abogados), una organización de la sociedad civil (OSC) cuya inscripción había sido suspendida por supuestas infracciones a la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA), que penaliza a las OSC que reciben fondos internacionales, **ganó** un juicio que era crucial para que pudiera acceder a sus activos congelados. El tribunal dictaminó que la FCRA no otorga al Estado el poder de coartar el funcionamiento de las organizaciones. Lawyers' Collective afirma que se convirtió en blanco de ataques tras demandar judicialmente a Amit Shah, presidente del partido gobernante, Bharatiya Janata. En Belice, por su parte, se marcó un hito histórico cuando **Osmany Salas**, presidente de la Asociación de la Industria del Turismo de Belice, se convirtió en el primer senador del país elegido directamente por la sociedad civil, conocido como el "13º senador". No obstante, el proceso aún tiene margen para mejorar: la participación electoral fue baja, ya que la mayoría de las OSC registradas quedaron inhabilitadas para votar por tener la documentación incompleta.

2017 también fue un año de protestas masivas en todo el mundo. Pocas captaron tanto interés como las que acompañaron a la toma de posesión del presidente Donald Trump en los **Estados Unidos** y continuaron durante todo el año. En República Dominicana, por su parte, un importante nuevo movimiento de masas, el **Movimiento Marcha Verde**, se conformó en rechazo de la extendida corrupción en las altas esferas. También Polonia fue testigo de importantes **protestas** en las principales ciudades, lideradas por estudiantes y organizadas en torno de cuestiones tales como la interferencia del gobierno en el currículo educativo y la libertad de prensa. En el mes de marzo, asimismo, se reanudaron las protestas en reclamo de cambios

en la política sobre aborto después de que el parlamento aprobara una ley que limitó aún más el acceso a anticoncepción de emergencia. Costa de Marfil experimentó grandes **huelgas docentes** en enero; numerosos jóvenes se adhirieron a las protestas y la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos. Los jóvenes también protestaron contra el aumento del desempleo y la falta de oportunidades de empleo en **Jordania**, donde los límites de la tolerancia del gobierno ante el disenso quedaron en evidencia cuando ocho activistas fueron arrestados y acusados de hacer declaraciones presuntamente antigubernamentales e insultar al rey en las redes sociales.

En los Estados Unidos y en muchos otros sitios se intentó suprimir las protestas mediante la violencia y la introducción de leyes restrictivas. En **Chile** se emplearon cañones de agua contra manifestantes indígenas Mapuche que exigían la liberación de su líder espiritual detenido, y muchos manifestantes fueron detenidos. En **Cuba**, las Damas de Blanco, un grupo conocido por realizar marchas silenciosas cada domingo para llamar la atención sobre la difícil situación de los presos políticos, soportaron múltiples incidentes de hostigamiento. En enero, la policía **allanó** la casa de una de las Damas de Blanco, Leticia Ramos, y arrestó a numerosas integrantes de la organización mientras viajaban al evento anual Misa por la Paz. Las activistas de Damas de Blanco siguieron siendo objeto de ataques a lo largo del año: en episodios separados en dos domingos de abril fueron **arrestados** 53 y 69 manifestantes, respectivamente, y se **reportó** que algunos activistas fueron golpeados estando detenidos.

En Panamá la policía usó gas pimienta para dispersar una **protesta** pacífica, mientras que en Perú hubo numerosos **heridos** y 72 personas arrestadas cuando la policía antidisturbios dispersó brutalmente una protesta contra los peajes. Esta fue una de las varias protestas peruanas que este año hicieron frente a la violencia de las fuerzas de seguridad: en mayo, una **marcha pacífica** por la legalización de la marihuana medicinal fue dispersada con gases lacrimógenos. En **Gabón**, por su parte, cuatro manifestantes fueron arrestados y privados de libertad durante una semana después de que

llamaran a boicotear la Copa Africana de Naciones, organizada en ese país. En Iraq, una **manifestación pacífica** en repudio del secuestro del periodista Afrah Shawki fue dispersada a los golpes. Al mes siguiente, en una **protesta** que tuvo lugar antes de las elecciones locales, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos, y murieron ocho manifestantes y un agente de policía.

También en Iraq, una importante OSC, Yazda, fue clausurada temporariamente por el gobierno regional del Kurdistan bajo acusaciones de participar en actividades políticas, una táctica utilizada con frecuencia en todo el mundo para intentar silenciar a las OSC disidentes. Se observaron tácticas similares en Kazajistán, donde la Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajistán fue **obligada a cerrar** y dos líderes sindicales que protestaron contra la decisión, Nurbek Kushakbayev y Amin Yeleusinov, fueron acusados de realizar una huelga ilegal. Bajo una serie de cargos espurios **recibieron sentencias de cárcel** de dos años y medio y dos años, respectivamente. Mientras tanto, en Moldavia entró en vigor una **nueva ley**, conocida como la “ley del dos por ciento”, que permite a los contribuyentes destinar el 2% de sus impuestos a una OSC u organización religiosa de su elección. Si bien pareció representar un avance en términos de financiamiento de la sociedad civil, la nueva ley generó preocupación sobre la posibilidad de que organizaciones vinculadas a figuras políticas y funcionarios públicos se beneficien de esta oportunidad, en un país con una larga historia de corrupción. Los primeros meses de 2017 también fueron testigo en Moldavia de protestas anti-corrupción similares a las de la vecina Rumania (*véase febrero*).

Un tema persistente durante el año fue la falta de tolerancia de líderes políticos y gobiernos ante las expresiones de disenso. El presidente de Tanzania, John Magufuli, **advirtió** a los periódicos que “sus días están contados” si fomentan la disidencia. Estas amenazas resultaron demasiado reales en muchos contextos, como fue el caso de Pakistán, donde cinco activistas con presencia en las redes sociales fueron **secuestrados en enero**. En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), por su parte, el activista **Abdulkhaleq Abdulla** fue arrestado

y retenido durante 10 días por publicar una serie de tweets promoviendo la libertad de expresión. El defensor de derechos humanos de los EAU **Ahmed Mansoor** también fue arrestado y detenido en el mes de marzo por su actividad en las redes sociales, mientras que diversos informes revelaron los **tratos degradantes** recibidos en prisión por los defensores de derechos humanos detenidos. En la República del Congo (Congo-Brazzaville), el editor de periódico **Ghys Foruné Dombe Bemba** fue arrestado con la acusación de interferir en la seguridad interna después de que escribiera un artículo sobre figuras militares de alto rango, y su periódico fue prohibido. Dos **periodistas italianos** también fueron arrestados y detenidos en Congo-Brazzaville en marzo. A nivel global, el **Comité para la Protección de los Periodistas** registró un número récord—262—de periodistas encarcelados en 2017 como resultado de su trabajo.

En diversos contextos hubo activistas que pagaron el máximo precio por expresarse y defender los derechos humanos, una tendencia nefasta que se observó a lo largo de todo el año: según **Front Line Defenders**, 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017. **Reporteros sin Fronteras**, por su parte, informó que 65 periodistas fueron asesinados en el año. En **ataques** separados ocurridos en Guatemala en enero, la activista ambientalista Laura Vásquez Pineda fue asesinada a tiros en un ataque contra su casa, el manifestante Sebastián Alonso resultó muerto cuando un grupo armado disparó contra campesinos movilizados, y también fue asesinado el periodista y activista por el derecho a la tierra Manuel Salvador Trujillo. Una periodista radial, Vilma Gabriela Barrios, fue asesinada el mes siguiente, y los ataques físicos y los asesinatos **continuaron**. La situación no fue mejor en la vecina Honduras, donde el periodista **Igor Padilla** fue asesinado mientras que otro periodista, Bictor Wuilfredo Ruiz Hernández, recibió amenazas de muerte. El mes siguiente, a casi un año del asesinato de la reconocida luchadora por los derechos indígenas Berta Cáceres, otro destacado activista indígena por el derecho a la tierra, **José de los Santos Sevilla**, también fue asesinado. Los ataques, así como el acoso estatal, **continuaron** durante el año (*véase noviembre*) y persistió la impunidad.

En Colombia, la defensora de derechos humanos Emilsen Manyoma y su compañero Joe Javier Rodallega fueron **hallados muertos** en enero en la ciudad de Buenaventura. Ella era una crítica frontal de la agroindustria internacional, los intereses mineros y los grupos paramilitares de derecha. Al igual que en Guatemala y Honduras, los homicidios continuaron en Colombia a lo largo de todo el año: hacia fines de marzo **se informó** que 19 activistas y líderes comunitarios habían sido asesinados tan solo en el primer trimestre. El hecho de que la mayoría de ellos estuvieran activos en el proceso de paz es muestra de lo tenso que sigue siendo el trayecto hacia la paz.

A nivel internacional, los Estados Unidos **se retiraron** del acuerdo comercial neoliberal de la Asociación Transpacífico, lo cual arrojó dudas acerca del futuro del acuerdo. Por su parte, en un gesto de bienvenida a su llegada a las Naciones Unidas, el nuevo Secretario General de la organización, António Guterres, designó a **tres mujeres** en altos cargos como parte de un compromiso con la paridad de género y la diversidad geográfica; entretanto, Vitit Muntarbhorn, el primer Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, celebró una primera e histórica **consulta** con la sociedad civil.

EEUU: MILLONES MARCHAN EN DESAFÍO AL PRESIDENTE TRUMP

Unas dos millones de personas participaron en las protestas realizadas en diversas ciudades de los **EEUU** y de todo el mundo el **20 de enero**, día de la toma de posesión del presidente Trump. Muchas de las personas que marcharon fueron mujeres deseosas de expresar su indignación ante la misoginia que caracterizó a la campaña del presidente Trump: se estima que 670 “marchas hermanas” tuvieron lugar, en los EEUU y en otros lugares, el

día de la inauguración presidencial. En Washington DC los manifestantes, estimados en casi medio millón, excedieron ampliamente en número a los ciudadanos presentes en la propia ceremonia de inauguración. A continuación, el régimen entrante traicionó su sensación de inseguridad enredándose en una mezquina guerra de palabras en su empeño por negar esta realidad.

Las manifestaciones continuaron en las semanas siguientes y durante todo 2017, entre otras razones en reacción a la revocación por parte del presidente Trump de la suspensión, ordenada por Obama, de las obras de construcción del oleoducto Dakota Access; y contra la **prohibición de entrar al país** que se impuso en el mismo mes de enero contra personas procedentes de varios países predominantemente musulmanes, tras lo cual se produjo una serie de manifestaciones en los aeropuertos. En febrero se llevaron a cabo protestas contra el gobierno de Trump en varias ciudades de **México**. En **abril** la Marcha por la Ciencia movilizó gente de todos los continentes contra la negación del cambio climático, y el 17 de junio la colaboración de numerosas OSC se tradujo en una serie de protestas, la **Marcha por la Verdad**, que se desplegó en 135 ciudades de EEUU para exigir una investigación independiente de los presuntos vínculos entre prominentes personalidades rusas y la campaña de Trump.

Las protestas fueron coloridas y creativas y, aunque desafiantes, fueron mayormente pacíficas. En las protestas del día de la toma de posesión hubo brotes esporádicos de violencia por parte de los manifestantes, así como casos de **uso excesivo de la fuerza** por parte de las fuerzas de seguridad. Tras las protestas, la **Unión Estadounidense por las Libertades Civiles** (American Civil Liberties Union) de Washington DC entabló una demanda alegando arrestos inconstitucionales, fuerza excesiva y tratamiento ilegal de las personas detenidas por las fuerzas de seguridad. También se informó que agentes encubiertos **se infiltraron** en un grupo de protesta antes de las manifestaciones del día de la inauguración.

Las detenciones fueron evidentemente una táctica corriente. Alrededor de 230 personas fueron arrestadas a continuación de las protestas del día de la asunción presidencial. Entre ellas se contaron nueve periodistas, detenidos bajo cargos de disturbios graves, un delito que conlleva penas de hasta 10 años de cárcel. Aunque las acusaciones contra siete de los periodistas fueron retiradas, al momento de redactar este informe dos de ellos siguen procesados, y uno de ellos, un **periodista freelance**, podría recibir una pena de 75 años.

Como lo señala **Nick Robinson**, del **Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro (ICNL)**, un aspecto inquietante del procesamiento de varias de las personas arrestadas fue que se basó en la aplicación del concepto de responsabilidad colectiva, en virtud del cual cualquier persona involucrada en una protesta corre el riesgo de ser considerada responsable de delitos cometidos por otros participantes. La sociedad civil trabajó para denunciar y rechazar esta posibilidad:

El uso del concepto de responsabilidad colectiva contra manifestantes va en aumento. Esto es profundamente perturbador. Los fiscales nunca alegaron tener evidencia de que las personas específicas que habían sido acusadas hubieran dañado propiedad o agredido a alguien; en cambio, intentaron responsabilizar a cualquiera que estuviera presente en la protesta en función de una teoría de la responsabilidad colectiva.

En diciembre un jurado declaró inocentes de todo cargo a los manifestantes de la primera tanda de acusados; sin embargo, el veredicto tardó 11 meses. Los restantes manifestantes acusados aún están a la espera de juicio. Hay que tener en cuenta que esta acusación no fue presentada por un oscuro fiscal local, sino por el gobierno federal, y más precisamente por el Departamento de Justicia.

Junto con CIVICUS y la Charity and Security Network, ICNL logró hacer llegar nuestras preocupaciones sobre las libertades de asociación, reunión y expresión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos



Manifestantes en una marcha contra Trump y Pence en Nueva York, noviembre

Crédito: Getty Images

(CIDH). Llevamos a una de las manifestantes acusadas, *Elizabeth Lagesse*, a dar su *testimonio* en una audiencia de la CIDH.

Hubo claras señales de que en lo sucesivo protestar conllevaría mayores riesgos. A medida que avanzó el año 2017, el presidente Trump reinstauró un programa para militarizar a la policía transfiriéndole equipos excedentes de Defensa, y en muchos **estados de los EEUU** se propusieron o debatieron leyes para obstaculizar la protesta. El entonces Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, **halló** que en EEUU los manifestantes se movían en un ambiente “**cada vez más hostil**” e insinuó que las respuestas de la policía ante las protestas variaban en función de la raza, etnia, cultura y clase social de los manifestantes.

Después de la elección presidencial de 2016, informa Nick, la mayoría de los 50 estados de los EEUU puso en marcha algún intento de aumentar las sanciones penales por protestar, lo cual sirvió para enfriar aún más el panorama de la protesta:

*Mediante el **US Protest Law Tracker** y otras labores relacionadas con la libertad de reunión, analizamos y buscamos incidir en contra de las leyes anti-protesta y de la política agresiva de **procesamiento judicial** de manifestantes. ICNL creó este mecanismo cuando nos percatamos del aumento en el número de proyectos de ley contra la protesta que estaban siendo propuestos en estados de todo el país. Entre noviembre de 2016 y principios de 2018, 28 estados consideraron 50 proyectos de ley para restringir el derecho a protestar. Ocho de estos proyectos fueron promulgados, mientras que muchos otros siguen pendientes.*

*Lo que hemos observado es no solo un auge de esta clase de leyes, sino también la proliferación de formas de coartar el derecho a protestar. Tal vez lo más inquietante haya sido el número de proyectos de ley que aplican teorías de la responsabilidad colectiva o que aumentan las penas por infracciones relativamente menores frecuentemente relacionadas con las manifestaciones, tales como el bloqueo del tráfico o la permanencia ilícita. También nos preocupa que varios gobernadores declararan estados de emergencia en respuesta a las protestas. Incluso en situaciones en las que esto podría tener sentido, como fue el caso de la manifestación de nacionalistas blancos en Charlottesville (*véase agosto*), estos poderes no están siendo utilizados en la medida correcta. Y nos preocupa que comiencen a ser usados toda vez que exista una mera amenaza de violencia en una protesta. Esto puede enfriar la participación en protestas.*

ESTAS
NUMEROSAS
RESTRICCIONES
ALEJARON
AÚN MÁS A
LOS ESTADOS
UNIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE
CONCRETAR EN
LA PRÁCTICA
LA PRIMERA
ENMIENDA DE
SU AFAMADA
CONSTITUCIÓN,
QUE CONSAGRA
LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
Y DE PRENSA
Y EL DERECHO
DE REUNIÓN
PACÍFICA

Las OSC se vieron afectadas de diversos modos por el cambio de clima político en los EEUU. Un desafío importante se derivó del uso aparentemente creciente de demandas estratégicas contra litigios públicos (SLAPP, por sus siglas en inglés) contra OSC. Greenpeace y otros grupos asociados fueron el blanco de una demanda SLAPP presentada por la firma de abogados predilecta del presidente Trump, Kasowitz Benson Torres, en respuesta a su papel en el movimiento de resistencia contra el oleoducto Dakota Access, que está siendo construido por la empresa Energy Transfer Partners. La demanda, presentada en nombre de Energy Transfer Partners, podría costar a los acusados 900 millones de dólares. Las SLAPP persiguen el objetivo de intimidar y silenciar el disenso sobrecargando a los críticos con los altos costos de un proceso legal, con la esperanza de que abandonen sus críticas. En muchas otras jurisdicciones, las SLAPP han sido prohibidas por constituir un serio obstáculo para la libertad de expresión.

Nick describe otras dificultades específicas que las OSC de EEUU enfrentaron en 2017 como consecuencia del nuevo clima político:

Hemos visto acciones discriminatorias o agresivas contra grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, en septiembre el diputado DeSantis presentó un proyecto de ley cuya aprobación hubiera prohibido a la organización Islamic Relief Worldwide recibir fondos federales sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que tenía vínculos con organizaciones terroristas. ICNL participó en una coalición que se pronunció en contra de este proyecto de ley, el cual finalmente fue retirado. Esta acción formó parte de un patrón más amplio consistente en atacar a ciertos grupos a partir de la afirmación de que tienen vínculos con grupos terroristas.

También hemos visto una serie de impactos sobre la sociedad civil resultantes de las nuevas políticas migratorias del gobierno. Empleados o voluntarios de muchas organizaciones se enfrentan a la amenaza de la deportación en caso de no abandonar los EEUU dentro

de un plazo límite. La prohibición de recibir visas para los ciudadanos de un conjunto de países seleccionados ha dificultado, y algunas veces imposibilitado, que la sociedad civil haga algo tan simple como traer de uno de esos países un orador para una conferencia. Las organizaciones se han movilizado para luchar contra algunas de estas políticas a causa del efecto que ellas tendrán en el país y en las vidas de las personas, pero también porque afectan el funcionamiento de las organizaciones.

Estos impactos tienen efectos más allá de las OSC de EEUU. A causa del perfil y el poder globales de los Estados Unidos, sus restricciones internas pueden inspirar a las fuerzas represivas de otros países. Por esta razón resultan particularmente preocupantes las propuestas para fortalecer la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que ha servido de punto de referencia a los gobiernos de otros países en busca de instrumentos para dificultar la obtención de financiamiento internacional por parte de las OSC. Al mismo tiempo, sin embargo, y tal como lo sugiere Nick, es importante colocar la experiencia reciente de los Estados Unidos en el marco de las más amplias tendencias políticas globales y observar de qué modo puede la sociedad civil internacional actuar en respuesta a ellas:

Otros gobiernos están imitando la retórica y las acciones de EEUU. Por ejemplo, en Hungría (véase junio) el primer ministro Viktor Orbán comenzó a usar la retórica de “Hungría primero”, modelada sobre la base del lema del presidente Trump “Primero América”, para justificar la aprobación de un proyecto de ley restrictivo del financiamiento internacional de la sociedad civil. La práctica del presidente Trump de tildar a ciertas historias de “noticias falsas” ha sido recogida y utilizada por los gobiernos de países como Camboya, China, Rusia y Siria contra los informes de los medios que documentan sus violaciones de derechos humanos. Se trata de una manera fácil de deslegitimar a los críticos.

Desafíos similares se observan también en varias democracias desarrolladas. En Australia ha habido propuestas para prohibir el financiamiento extranjero de las OSC y limitar la cantidad de labores de incidencia que tienen permitido realizar. Francia ha presenciado la repetida extensión de estados de emergencia de alcance nacional y el uso de otras medidas de seguridad nacional con el potencial de socavar un espacio cívico libre y abierto. Estamos ante un desafío que no solamente afecta a los EEUU.

En la medida en que el gobierno de los EEUU deje de tomar la iniciativa de proteger el espacio cívico a nivel global, la sociedad civil internacional deberá presionar a los gobiernos de otras democracias para que asuman un rol de liderazgo. Hay un vacío que debe ser llenado.

En tiempos como estos es comprensible que muchas de las respuestas de la sociedad civil sean defensivas. Necesitamos defender los logros que hemos acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, creo que también es muy importante que sigamos persiguiendo nuestra visión de la sociedad civil pluralista e independiente que queremos crear en el mundo. Incluso en tiempos difíciles, queremos ser proactivos y fijar la agenda que queremos fijar, y no solo reaccionar ante la más reciente crisis o preocupación. Esto es difícil de lograr, pero es una tarea vital.

En suma, en 2017 Estados Unidos se alejó aún más de la posibilidad de concretar en la práctica la Primera Enmienda de su afamada Constitución, que consagra la libertad de expresión y de prensa y el derecho de reunión pacífica. Es justamente después de una elección polémica y polarizada, cuando el disenso está en su punto más alto, que la gente necesita más que nunca unirse y hacer escuchar pacíficamente sus voces. La capacidad de la ciudadanía para movilizarse y protestar debe ser vista como un componente intrínseco de la democracia y un complemento esencial del voto en elecciones

periódicas. En 2017, EEUU exhibió lo mejor y lo peor de las tendencias que atraviesan a las democracias contemporáneas: la expresión del disenso se volvió más difícil, pero aun así la ciudadanía se movilizó con coraje para hacer oír su voz.

GAMBIA: LA SOCIEDAD CIVIL AYUDA A CONCRETAR UN CAMBIO DEMOCRÁTICO

En **Gambia**, el presidente Jammeh seguramente habrá esperado gobernar tanto tiempo como lo deseara. Estaba en el poder desde 1994, cuando encabezó un golpe de estado, y había mantenido el control mediante la represión implacable del disenso y la celebración de elecciones cada vez más injustas, pero que sin embargo habían agregado una pátina de legitimidad a su reinado continuo. Pero en diciembre de 2016 sucedió algo inesperado: a pesar de la represión y la **intimidación pre-electoral**, con la consabidas palizas y arrestos de manifestantes pacíficos y el encarcelamiento de personas por razones políticas, grupos de oposición previamente fragmentados se unieron detrás de un candidato de consenso, Adama Barrow. Barrow ganó las elecciones con la promesa de revertir los ataques contra los derechos humanos, promover el buen gobierno y restaurar la reputación internacional de Gambia. El presidente Jammeh rápidamente se echó atrás en su compromiso de respetar el resultado electoral y manifestó su intención de permanecer en el poder. Mientras luchaba por conservar el cargo, varias personas fueron detenidas por el solo hecho de llevar **camisetas** con el eslogan #Gambiahadecided (#Gambiahadecidido), **cuatro estaciones de radio privadas** fueron clausuradas y varios **periodistas internacionales** fueron deportados o les fue denegada la entrada al país.

La presión internacional, y especialmente la acción conjunta de los países vecinos de Gambia, fue uno de los factores que el **21 de enero** llevaron al

presidente Jammeh a exiliarse. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se comprometió a intervenir militarmente y movilizó a unos 7.000 efectivos en las fronteras de Gambia, en tanto que el jefe del ejército de Gambia prometió lealtad al presidente electo Barrow. Pero es importante reconocer también el rol que desempeñó la sociedad civil al tomar posición en contra del presidente Jammeh. Importantes **instituciones de la sociedad civil**, tales como los sindicatos, las organizaciones de estudiantes, la academia y los consejos islámico y cristiano, salieron a manifestar su reconocimiento del nuevo presidente y convocaron a un boicot en caso de que el presidente Jammeh permaneciera en el poder. Las redes sociales, en las cuales había debido basarse la campaña de Barrow a causa del dominio estatal de los medios tradicionales, también ofrecieron plataformas importantes para el disenso.

El presidente entrante tomó medidas inmediatas para barrer con el legado tóxico de Jammeh, entre las cuales se contaron el compromiso de unirse al Commonwealth y permanecer en la Corte Penal Internacional (CPI), la **liberación** de algunos presos políticos detenidos desde hacía mucho tiempo y los compromisos de **reformular el sistema de medios** y establecer una **comisión de verdad y reconciliación**. Poco después de la llegada al poder del presidente Barrow conversamos con **Sohna Sallah**, de la **Unión Democrática de Activistas de Gambia**, quien describió el potencial de una Gambia recién democratizada al tiempo que agregó la necesaria nota de precaución:

La apertura del espacio democrático en Gambia creará oportunidades para que los ciudadanos estén más informados e involucrados en una verdadera democracia participativa. Los periodistas podrán operar libremente sin obstáculos y los ciudadanos tendrán acceso irrestricto a la información. La sociedad civil podrá dejar una huella más profunda y permanente en el país y funcionará como socio y guardián de la nueva administración. Aumentarán las oportunidades de negocios para miles de gambianos, ya que el ex presidente Jammeh había monopolizado gran parte de los negocios de Gambia, dejando fuera de



Partidarios del presidente entrante de Gambia, Adama Barrow, saludan su regreso al país

Crédito: Getty Images

competencia incluso a los vendedores minoristas. Finalmente, Gambia será bienvenida de regreso a la familia de naciones del mundo en las cuales se respetan las normas y los procedimientos democráticos. La sociedad civil, los activistas y los periodistas de Gambia podrán seguir poniendo en evidencia los problemas que afectan al país.

Pero debemos ser realistas: por brillante que sea el futuro de esta pequeña nación, la ausencia del ex presidente Jammeh no librerá al país por arte de magia de todos sus problemas. Será un largo camino y el país necesitará de las manos de todos para garantizar la continuidad del trayecto hacia una democracia y una prosperidad sostenibles.

En efecto, el cambio de gobierno no fue una panacea para la asediada sociedad civil de Gambia, que siguió sufriendo restricciones. El periodista **Kebba Jeffang** fue agredido por partidarios del presidente Barrow durante una conferencia de prensa en el mes de marzo. **Bubacarr Badjie**, un empleado del Servicio de Inteligencia del Estado, fue detenido en junio después de hablar públicamente sobre las prácticas de la agencia; ese mismo mes, una persona murió cuando una **protesta** de partidarios de Jammeh fue reprimida por las fuerzas gambianas y de la CEDEAO. La persistencia de leyes penales de difamación sigue constituyendo una **restricción** de la libertad de expresión. Pero el ejemplo de **Burkina Faso**, donde la protesta popular primero expulsó a un dictador de larga data en 2014 y luego resistió a un golpe militar en 2015 y garantizó el retorno de la democracia, muestra que el trabajo de largo plazo de construir una democracia puede sostenerse tras el primer impulso de la protesta. Tampoco en Burkina Faso el proceso ha sido fácil: las libertades fundamentales siguen sufriendo ataques y se requiere del compromiso permanente de la sociedad civil. La sociedad civil de Gambia, en toda su diversidad, necesita apoyo para desempeñar su papel esencial a la hora de defender las reformas democráticas y llamar a rendir cuentas a los nuevos líderes del país.

PAKISTÁN: LA DESAPARICIÓN DE ACTIVISTAS, UNA OMINOSA ADVERTENCIA

En enero desaparecieron en **Pakistán** cinco activistas antitalibán, muy activos en redes sociales y plataformas de blogueo. Todos ellos abogaban abiertamente contra los Talibán al tiempo que criticaban la falta de acción del gobierno contra el extremismo y los abusos de los militares contra los derechos humanos. Sus sitios web y sus blogs también “desaparecieron”, ya que fueron bajados de internet. Ese mismo mes, en un indicio más del nivel de amenaza para la libertad de expresión, el secretario de prensa de la Asociación de Medios de Pakistán en Kalat, **Jan Muhammad Shahbaz Samalani**, fue asesinado a tiros.

En un país donde abundan los incidentes de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad, la desaparición de los cinco activistas provocó protestas callejeras y llamamientos por internet para exigir que regresaran sanos y salvos. Los secuestros fueron condenados por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y por David Kaye, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión. En respuesta, sin embargo, los cinco activistas y sus seguidores fueron desprestigiados y amenazados por extremistas en las redes sociales. Además de desaparecer, los cinco fueron objeto de una denuncia por blasfemia a causa de sus publicaciones, una ilustración del modo en que la Ley de Blasfemia de Pakistán es utilizada para frenar el disenso y es capaz de habilitar la violencia tanto de grupos extremistas como del propio Estado. En marzo, por ejemplo, otros tres blogueros fueron acusados de blasfemia ante un tribunal antiterrorista, y en abril el destacado activista **Riaz Ahmed** fue arrestado y detenido cuando se dirigía a una conferencia de prensa para exigir la liberación de otro activista detenido. Resulta evidente que fue detenido por apoyar a personas acusadas de blasfemia. En abril,

el gobierno alentó aún más a las fuerzas extremistas cuando anunció que estaba **investigando a OSC** por denuncias de propagación de blasfemia y pornografía en las redes sociales.

Los cinco activistas desaparecidos reaparecieron a fines de enero en circunstancias igualmente misteriosas. Salieron del país por seguridad y en un principio ninguno de ellos quiso hablar de lo sucedido. En marzo, sin embargo, uno de ellos, Waqas Goraya, ya radicado en los Países Bajos, declaró que había sido secuestrado y que se había sentido tan afectado que no había podido reanudar su actividad en internet. Se sospecha que detrás de los secuestros estuvieron las fuerzas de seguridad: Waqas **afirmó** que había sido detenido y torturado por una institución gubernamental vinculada con los militares.

El secuestro de los cinco activistas puso de manifiesto la constante tensión existente en torno del uso de las redes sociales para el activismo en Pakistán, donde las redes sociales han creado tanto oportunidades como amenazas. En ese sentido, **Zoya Rehman**, ex integrante de la **Fundación Derechos Digitales**, subraya que el espacio en línea ha brindado a los grupos feministas oportunidades para coordinar, organizarse, hacer campaña y conectarse con otros movimientos opuestos a las prácticas sociales conservadoras:

La creciente presencia de colectivos feministas en internet demuestra que los espacios virtuales se han convertido ellos mismos en sitios de resistencia política importantes y a veces desafiantes. Prestan apoyo a comunidades y causas que no solo reciben poca atención en espacios fuera de línea, sino que además son objeto de restricciones deliberadas. Esos espacios virtuales tienen el potencial de producir y celebrar una variedad de políticas e identidades, y de hacer que las personas se vuelvan más visibles para evitar la marginalidad que experimentan en el mundo exterior.

Pero al mismo tiempo, continúa Zoya, la actividad en internet ha expuesto a la sociedad civil a nuevas formas de ataques, tanto del Estado como de grupos extremistas, que refuerzan las violaciones de derechos que tienen lugar fuera de internet:

Las feministas con presencia en internet se han vuelto cada vez más vulnerables a ataques en línea y, lo que es peor, a ser víctimas de desaparición forzada o asesinato. El control y la vigilancia que solían tener lugar en los espacios fuera de línea ahora están ocurriendo también en internet, donde el gobierno modela la narrativa que establece contra quién debe protestar el público y a quién debe designar como anti-Estado. Esta retórica a menudo resulta en el acoso de las feministas en internet, el envío de mensajes amenazantes o la extracción de sus números de teléfono móvil de sus perfiles. Luego son re-victimizadas si deben hacer frente a sus abusadores virtuales.

Incluso después de que los cinco activistas fueran liberados, la sociedad civil permaneció preocupada por la inacción gubernamental a la hora de investigar el secuestro, que dió la pauta de la cultura más profunda de impunidad que rodea a los ataques contra activistas y defensores de derechos humanos en Pakistán. **Front Line Defenders**, por ejemplo, ha subrayado que en ninguno de los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos que ha documentado en Pakistán el perpetrador ha sido llevado a la justicia; por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU **expresó su preocupación** por la impunidad por los crímenes contra periodistas y señaló que el Estado no ha sido capaz de proporcionar estadísticas sobre investigaciones acerca de esos crímenes. El Comité contra la Tortura también ha expresado su **profunda preocupación** por los casos de tortura ocurridos en 2017, y Amnistía Internacional ha **reportado** casi 300 casos de desapariciones tan solo entre agosto y octubre. Parece, pues, tristemente evidente que las desapariciones y la impunidad están destinadas a continuar.



REPÚBLICA DOMINICANA: MOVILIZACIONES MASIVAS CAMBIAN EL PANORAMA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

En diciembre de 2016, un tribunal de los Estados Unidos declaró culpable de corrupción a Odebrecht, un gigante corporativo con sede en **Brasil**. Odebrecht estuvo involucrado en muchos de los proyectos de construcción más grandes de América Latina, y en 2015 fue implicado en Brasil en el enorme escándalo de corrupción Lava Jato (Lavadero de Autos), que expuso una vasta red de corrupción que entrelazaba a la petrolera estatal Petrobras, a políticos de alto rango y a los grandes partidos políticos. A medida que la investigación brasileña fue ampliando su alcance, se descubrió que **Odebrecht** había pagado 3.300 millones de dólares en sobornos, incluidas grandes donaciones a la campaña política de Michel Temer, quien se benefició del escándalo de corrupción para reemplazar a Dilma Rousseff en el cargo presidencial (*véase abril*). Se reveló también que Odebrecht tenía un departamento completo dedicado al pago de sobornos.

El proceso en los Estados Unidos expuso el alcance internacional de la corrupción de Odebrecht: la empresa admitió que había pagado sobornos en 12 países de África y América Latina y que había contribuido con fondos para las campañas de **seis** presidentes latinoamericanos. En total, admitió haber pagado sobornos por 788 millones de dólares para ganar 100 contratos que generaron 3.300 millones en ganancias, y acordó pagar multas corporativas por un total de 3.500 millones.

En la **República Dominicana**, Odebrecht admitió haber pagado sobornos por un total de 92 millones de dólares. La naturaleza sistémica de la corrupción fue puesta en evidencia por el hecho de que estos sobornos habían sido pagados

Miles de dominicanos vestidos de verde, símbolo de esperanza, marchan por las calles de la capital, Santo Domingo, el 22 de enero

durante los mandatos de tres presidentes sucesivos pertenecientes a dos partidos diferentes. La República Dominicana, clasificada en el puesto 120 sobre 176 países en el **Índice de Percepción de la Corrupción 2016** de Transparencia Internacional, claramente tiene un problema de corrupción. La ira ciudadana se concentró particularmente en el proyecto más grande de Odebrecht en el país, la construcción de la planta de energía de **Punta Catalina**. Incluso antes de que la adjudicación del contrato a Odebrecht fuera denunciada como corrupta, la planta de energía fue duramente criticada por la sociedad civil por sus costos ambientales y financieros. Según **Enrique de León**, del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, el proyecto de Punta Catalina puso en evidencia las conexiones entre la corrupción, la conservación del poder político y el fracaso para avanzar en la lucha contra el cambio climático:

El nuestro es un gobierno canalla, que de un modo ilegal y corrupto hasta un grado nunca visto en nuestra historia, desde 2013 construye dos plantas de carbón de 770 megavatios en Punta Catalina. Al mismo tiempo, en noviembre de 2015 nuestro presidente fue a París a liderar a los estados insulares más amenazados en el planteo de la demanda de reducción de la huella de carbono, y a prometer una disminución de las emisiones de 25% para 2030. Cosa que será imposible de cumplir si se pone a funcionar unas plantas de carbón que por sí solas generarán 6,34 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, lo cual supone un incremento de más de 20% en las emisiones totales del país.

El gobierno se resistió a la ratificación de los Acuerdos de París porque sabía que con las nuevas plantas de carbón le sería imposible cumplir con las metas. Nuestro país tiene una gran necesidad de energía eléctrica porque, aun bajo un modelo de gran desigualdad y exclusión, la economía está creciendo. Actualmente tenemos déficit energético, con producción de energía cara e ineficiente, y por eso tenemos grandes apagones. O sea que sí, necesitamos producir más y mejor energía, pero lo que no necesitamos es que esa energía salga del carbón, cuando nosotros ni siquiera somos productores de carbón.

La opción por el carbón, así como la elección de la empresa Odebrecht, que encabeza el consorcio que construye Punta Catalina, fue una decisión de financiamiento político. El presidente Danilo Medina quería ser reelecto en 2016, y la reelección estaba prohibida, de modo que el gobierno tuvo que financiar primero la reforma electoral y luego la campaña para la reelección. Ese financiamiento lo facilitó el proyecto de Punta Catalina. Está plenamente documentado que la licitación fue amañada: Odebrecht compró ese contrato, tal como lo confesó en diciembre de 2016 en Nueva York. En tanto que forma de financiamiento político corrupto, la obra incluyó desde el principio una sobrevaluación de mil millones

SE ELIGIÓ
EL COLOR
VERDE PARA
REPRESENTAR
LA ESPERANZA:
NO QUERÍAMOS
QUEDARNOS
EN LA
INDIGNACIÓN,
SINO QUE
QUERÍAMOS
TRANSMITIR LA
SENSACIÓN DE
QUE ESTA VEZ
SÍ PODÍAMOS
GANAR



de dólares. De los 2.945 millones de dólares que iba a costar la obra, mil eran sobreprecios. Esto lo denunciábamos, pero no hubo forma de que se abriera un proceso de investigación serio, porque nuestro Poder Judicial es extremadamente dependiente del Ejecutivo.

Tal es la escala de la corrupción, continúa Enrique, que aun cuando presiona para que la República Dominicana se beneficie del Fondo Verde para hacer frente al cambio climático, la sociedad civil teme que, en ausencia de cambios importantes en materia de gobernanza, todo nuevo fondo sea arrebatado por la corrupción:

Enfrentamos un dilema muy duro: al mismo tiempo que reclamamos a la comunidad internacional apoyo para enfrentar las consecuencias y combatir las causas del cambio climático, nos sometemos a la rapacidad de nuestros propios gobiernos. Solo un gobierno auténticamente democrático, que represente los intereses de la mayoría de la ciudadanía en vez de los intereses concentrados de los empresarios y los políticos aunados por la corrupción, podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático.

En este contexto y dada la naturaleza arraigada del problema, los activistas resolvieron tomar el veredicto de Odebrecht como punto de partida para una acción concertada para limpiar las instituciones y desafiar la impunidad. Así nació el Movimiento Marcha Verde. **Manuel Robles**, uno de sus integrantes, describe cómo surgió el movimiento y de qué modo se convirtió en un punto focal para la sed ciudadana de cambio:

En la República Dominicana la impunidad es casi tan antigua como la república: casi no ha habido sanciones ejemplarizantes contra la corrupción administrativa, y existe una gran frustración. Históricamente, cuando las encuestas preguntaban sobre los principales problemas del país, siempre aparecía mencionada la corrupción. Pero la gente creía, y todavía muchos creen, que no hay nada que hacer al respecto.

En este caso, sin embargo, una diferencia importante es que la información venía desde fuera, desde Estados Unidos y Brasil, y que una vez que empezó a fluir no pararon de revelarse nuevos datos. También se difundió rápidamente la información de lo que pasaba en otros países, como Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, donde se abrieron investigaciones y hubo centenares de acusaciones contra empresarios y funcionarios, incluidos ex ministros y hasta ex presidentes. En ese contexto, muchos pensaron que el gobierno dominicano esta vez no iba a poder manipular el caso como lo había hecho con tantos otros en el pasado, y que no tendría más opción que actuar, aún en contra de su voluntad.

El caso Odebrecht generó indignación en la República Dominicana. En ese momento, con algunos compañeros y compañeras de la sociedad civil con los que en el pasado habíamos participado en actividades contra la corrupción y la impunidad decidimos juntarnos para ver qué hacer. Al mismo tiempo, un programa radial llamado Gobierno de la Tarde había empezado a difundir la idea de hacer una marcha para exigir justicia en el caso Odebrecht. Entonces, el 4 de enero nos reunimos un grupo pequeño y decidimos organizar una movilización para el mismo mes.

Nuestra primera demanda fue que se conformara una comisión de fiscales independientes para llevar el proceso de investigación y acusación en el caso Odebrecht. No creemos en el Ministerio Público, ya que el procurador es miembro del partido de gobierno y trabajó en la campaña del presidente, por lo que pensamos que no garantiza una investigación imparcial. Pedimos que se formara una comisión que contara con el asesoramiento de las Naciones Unidas, en el marco de la Convención contra la Corrupción de la cual nuestro país es signatario. Sabíamos que era muy difícil que esto ocurriera, pero era importante poner en evidencia los niveles de complicidad del gobierno. También pedimos que se identificara y sometiera a proceso

judicial a todos los funcionarios que recibieron sobornos al igual que a los ejecutivos de Odebrecht en el país, que se cancelaran todos los contratos vigentes de Odebrecht, que se auditaran las obras construidas por la empresa, y que se recuperara el dinero de sobornos y sobrevaluaciones. También demandamos que se investigara el financiamiento ilícito de campañas electorales.

Una vez identificada su agenda, relata Manuel, el movimiento puso mucho énfasis en forjar un consenso no partidista entre diversos sectores de la sociedad civil, sobre la base de algunos elementos de éxitos pasados, pero con la decisión consciente de mirar hacia adelante:

En primer lugar, se eligió el color verde para representar la esperanza: no queríamos quedarnos en la indignación, sino que queríamos transmitir la sensación de que esta vez sí podíamos ganar. Esto marcó una diferencia con otras protestas anteriores, que por ejemplo habían optado por el color negro como señal de luto por la muerte de la justicia. Nosotros decidimos que el color verde fuera el elemento unificador de la diversidad de nuestro movimiento, que incluye una cantidad de organizaciones con múltiples banderas y colores. La elección del color estuvo ligada a la decisión de plantear nuestro reclamo en positivo. La idea era que el caso Odebrecht marcara el principio del fin de la impunidad en el país.

En esos primeros momentos estuvieron presentes las organizaciones protagónicas de los últimos años, tales como Poder Ciudadano, un conglomerado muy activo a fines de 2015 con sus “cadenas humanas”, un antecedente de cierto éxito en materia de movilización anticorrupción; Participación Ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional, que tiene importantes investigaciones sobre el tema de la impunidad; Somos Pueblo, una organización de jóvenes nacida en las redes sociales, y la corriente de la Asociación Dominicana de Profesores liderada por María Teresa Cabrera. Cabrera también había encabezado el Movimiento 4%, que demandaba el aumento de la inversión pública en educación que



Las movilizaciones en la República Dominicana continuaron a lo largo de todo el año

exigía la ley, y fue uno de los principales antecedentes de movilización social exitosa en el país. En nuestro primer encuentro le pusimos fecha, 22 de enero, a la primera movilización.

Teníamos apenas un par de semanas para organizarla. Nos pusimos en contacto con todos los grupos sociales con los cuales manteníamos relaciones, y también con agrupaciones partidarias, con las cuales mantuvimos reuniones dejando en claro las reglas de juego: que tendríamos un solo color, que no habría protagonismos de ningún partido político y que esta sería una expresión ciudadana, de modo que los militantes políticos podrían participar, pero en su condición individual de ciudadanos. Ellos aceptaron las reglas de juego, y en consecuencia desde el principio articulamos esfuerzos con una vasta red de organizaciones sociales y políticas, en un ambiente de relativa armonía, lo cual no es muy común. En verdad es un logro impresionante, teniendo en cuenta el amplísimo espectro que abarca nuestra coalición, integrada por ejemplo por organizaciones LGBTI al mismo tiempo que por grupos evangélicos. Son grupos que en otros temas están fuertemente enfrentados, pero que para esto se han sentado a la misma mesa.

Hicimos difusión por todos los medios. Las redes sociales fueron importantes, pero la radio y la televisión fueron vitales, en la medida en que no solamente difundieron, sino que hubo programas con actitud militante, y con un discurso en la misma línea que el nuestro. El tema fue motorizado por los periodistas de El Gobierno de la Tarde, de la emisora radial que de lejos tiene la mayor audiencia en el país. Sus comunicadores son prestigiosos y el programa, que tiene llegada a todos los sectores sociales, fue un vocero militante de este proceso, lo cual permitió la difusión rápida de todas las convocatorias. Lo mismo pasó con varios programas de televisión, y como resultado el proceso tuvo un liderazgo mediático.

El 22 de enero nos movilizamos sin nombre, pero la gente misma enseguida comenzó a llamarnos Marcha Verde. Porque lo que sucedió no tuvo precedentes: nunca antes en nuestro país tanta gente se había movilitado por una causa no partidaria. Nosotros mismos nos sorprendimos con cada marcha por la forma en que habíamos conectado con la gente... La verdad es que en un principio pensábamos en una actividad modesta; de hecho, la primera meta que nos pusimos fue de unas 6.000 personas.

El 22 de enero, unas **200.000 personas** marcharon en la que fue considerada la mayor marcha pacífica de la historia de la República Dominicana. La indignación de la ciudadanía ante la corrupción endémica y su apoyo a los objetivos de la Marcha Verde quedaron ampliamente demostrados. Como describe Manuel, a partir de allí la protesta cobró impulso:

Una vez iniciado, el proceso se alimentó de sí mismo. El primer éxito de movilización subió los ánimos. Además de los activistas de siempre marchó mucha gente, sobre todo de clase media, que no había marchado nunca en su vida. Y al llegar a la marcha se dieron cuenta de que eran muchos. El hecho de ver tanta gente junta realimentó la participación: de hecho, después de la primera movilización la disposición de la gente a cooperar fue abrumadora.

A las pocas semanas Gallup hizo una encuesta según la cual el 92% de la población apoyaba a la Marcha Verde. Y en paralelo empezó a bajar la valoración del gobierno, que al iniciarse este proceso era bastante elevada. Pero el gobierno últimamente no ha publicado encuestas, cosa que antes hacía con frecuencia. Con la oposición política aún con problemas, la Marcha Verde se ha conformado como el verdadero sujeto de oposición. Ello a pesar de que siempre insistimos en que demandamos que se castigue a todos los corruptos, sean de este gobierno o de los anteriores. Aunque si bien no tenemos corruptos favoritos, ejercemos presión básicamente sobre el gobierno de turno porque es el que puede dar respuesta a nuestras demandas.

Las protestas, que continuaron a lo largo del año, incluyeron manifestaciones masivas ante el Palacio Nacional en junio. Sin embargo, tal como lo señala Manuel, el movimiento fue más allá y buscó movilizar a la ciudadanía de modos diversos:

*Lanzamos un Libro Verde que se firmaba en las esquinas y plazas de los pueblos del país, y tuvo una acogida masiva. En unas pocas semanas conseguimos **más de 300 mil firmas**. Fue un proceso de empoderamiento; la gente se comprometía a seguir luchando hasta que lográramos nuestros objetivos. El 22 de febrero le entregamos al presidente un acta notarial que certificaba que se habían recolectado 312.415 firmas, y de ese modo hicimos oficial nuestra solicitud, y emplazamos al presidente a dar respuesta a más tardar en su discurso anual de rendición de cuentas el 27 de febrero.*

*Y el presidente recogió el tema en su **discurso**. Aseguró que apoyaba la lucha contra la corrupción y que caerían todos los implicados – dijo literalmente que no habría “vacas sagradas”. Pero insistió en que el Ministerio Público llevaría adelante el proceso. Por eso nosotros rechazamos el discurso y denunciemos la contradicción entre lo que el presidente decía y lo que hacía.*

El proceso fue exitoso porque multiplicó la organización, que se expandió mediante la creación de “nodos verdes” en diferentes municipios. Así el movimiento salió de la capital y se instaló en cada localidad. Empezaron a realizarse marchas regionales, e incluso subregionales. Cada una de ellas se convirtió en el acontecimiento de movilización social más grande de la historia de esas localidades.

*Luego nos concentramos en una acción a la que llamamos “**barrios verdes**”, con el objetivo de llevar la lucha por el fin de la impunidad a los sectores populares más afectados por la apropiación de fondos públicos, el pago de sobornos y las sobrevaluaciones de la obra*

pública. Es una campaña educativa y de movilización en los barrios más carenciados, en la cual repartimos volantes y conversamos con los moradores para hacerles ver la relación que existe entre la corrupción y la falta de servicios que padecen.

Fue evidente que la presión dio sus frutos, al menos parcialmente, ya que el movimiento continúa demandando más, como lo subraya Manuel:

*A mediados de mayo la Procuraduría General recibió de Brasil la documentación sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, y poco después se ejecutaron **órdenes de arresto** contra 14 políticos, funcionarios y ex funcionarios de alto nivel.*

Sin embargo, pese a que las investigaciones mostraban que los mayores montos de sobornos fueron pagados después de 2012, cuando asumió el actual gobierno, la mayor parte de los detenidos eran ex funcionarios de gobiernos anteriores. La planta termoeléctrica de Punta Catalina quedó fuera de la investigación. También quedaron excluidos de la investigación los delitos de financiamiento ilegal de campañas políticas y de sobrevaluación de obras. O sea que evidentemente el gobierno está ocultando parte de la verdad. Está excluyendo de la investigación a los proyectos más controvertidos, los temas más comprometedores, y la gente más allegada al presidente; solo está investigando a aquellos a los que es imposible excluir porque hay demasiadas evidencias en su contra.

Entonces, nuestra posición frente a estos arrestos es que fueron una victoria de la presión social, pero que no son suficientes. Hemos sumado a nuestra lista un nuevo reclamo: que se depure la justicia. En particular, hemos señalado a algunos jueces que han demostrado su complicidad con la impunidad y exigimos que no intervengan en el caso Odebrecht. A lo largo del proceso, en combinación con nuestra táctica principal – la movilización callejera – hemos presentado cantidad de demandas judiciales. Por ahora mucho no han avanzado,

pero pensamos que también vamos a conseguir progresos en el terreno judicial. No todos los culpables serán castigados, pero todavía caerán muchos más.

Si bien predomina la esperanza de que la República Dominicana experimente una ruptura decisiva con su historia de corrupción e impunidad, quedan muchos desafíos. En **junio** Hero Pérez, un líder comunitario estrechamente vinculado con la Marcha Verde, denunció que su auto fue atacado y empujado fuera de la carretera. Ese mismo mes, la activista transgénero Jessica Rubi Mori fue asesinada. Al mes siguiente fue el turno de **Vladimir Lantigua Baldera**, dirigente del movimiento Frente Amplio de Lucha Popular, quien fue muerto a tiros mientras participaba en una huelga contra la corrupción; la organización culpabilizó a la policía. Pero frente a los profundos desafíos, concluye Manuel, hay orgullo y optimismo derivados de la movilización histórica que ha sacudido al país:

Se ha producido una reacción ciudadana sin precedentes. Dominicana suele ser un país rezagado en este tipo de luchas, pero esta vez vamos por delante. Esto nos llena de orgullo y satisfacción.